

Diciembre 5 de 1946 (Mañana)

63ª REUNION — 16ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Silverio Pontieri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:

Albrieu, Oscar E.  
Alvarez, Juan Daniel  
Alvarez, Néstor  
Alvarez Pereyra, Manuel  
Alvarez Pérez, Vicente  
Alvarez Vocos, Enrique  
Allub, Rosendo  
Aráoz, Ricardo E.  
Arévalo Cabeza, Jabel  
Argaña, José M.  
Arias, José  
Ayala López Torres, Francisco  
Bagnasco, Vicente  
Balbin, Ricardo  
Barreiro, Carmelo  
Benítez, Antonio J.  
Bertini, Amadeo  
Bonazzola, Romeo E.  
Boullosa, Emilio M.  
Braga, Juan Carlos  
Busaniche, Julio J.  
Bustos Fierro, Raúl  
Calcagno, Alfredo D.  
Cámara, Guillermo F.  
Cámpora, Héctor J.  
Camus, Eloy P.  
Candiotti, Alberto M.  
Casal, Raúl M.  
Casas Noblega, Armando  
Cleve, Ernesto  
Cooke, John William  
Córdova, J. Salvador  
Corvalán, Luciano E.  
Cufre, Orlando H.  
Curchod, Amado J.  
Decker, Rodolfo A.  
Degreef, Juan Ramón  
De la Torre, Juan  
Del Carril, Emilio Donato

Del Mazo, Gabriel  
Delleplane, Luis  
Díaz (olodrero, Justo  
Díaz de Vivar, Joaquín  
Díaz, Manuel M.  
Dri, Roberto  
Dufau, Juan Adolfo  
Errecart, Juan A.  
Fajre, José Benito  
Fernández, Hernán S.  
Ferrando, Manuel P.  
Ferrer, Modesto  
Fregossi, Luis J.  
Fronózi, Arturo  
Galvagni, Saverio M.  
Garaguso, Bernardino Hipólito  
Garay, Marcelino S.  
García, Manuel  
García Quiroga, Alejandro  
Giménez Vargas, Francisco  
Guardo, Ricardo C.  
Guillot, César Joaquín  
Klix López, Guillermo  
Lareo, Ricardo  
Lasciat, Guillermo F.  
Lencinas, José R.  
Letamendi, Balbino (h.)  
Libeaga, Félix J.  
López Serrot, Oscar  
Mac Kay, Luis R.  
Malecek, José Enrique  
Mántaras, Manuel J.  
Mariategui, Angel S.  
Martínez Guerrero, Guillermo  
Martínez Luque, Enrique  
Mendiando, F. Daniel  
Messina, Humberto  
Montes de Oca, Carlos  
Moreno, José Luis  
Mossot Iturraspe, Mario  
Mujica, Rodolfo

Noriega, Juan J.  
Obeld, Leonardo  
Orozco, Modesto V.  
Osinalde, Rafael  
Otonello, Benito J.  
Pasquini, José P. D.  
Pastor, Reynaldo A.  
Peña Guzmán, Solano  
Perea, Pedro J.  
Pérez de la Torre, Horacio  
Petrucci, Miguel  
Pirani, Antonio S.  
Pomar, Gregorio  
Pontieri, Silverio  
Pueyrredón, Horacio Honorio  
Raña, Eduardo Antonio  
Ravignani, Emilio  
Reyes, Cipriano  
Reynés, Leandro R.  
Rodríguez de la Torre, Raúl  
Rodríguez, Nerio M.  
Rojas, Absalón  
Rojas, Nerio  
Rossi, José  
Rubino, Sidney Nicolás  
Rumbo, Eduardo I.  
Sammartino, Ernesto E.  
Santander, Silvano  
Saravia, Teodoro S.  
Sarmiento, Manuel  
Sarraute, José Roberto  
Sobral, Antonio  
Sorgentini, Mario Alberto  
Sustaita Seiber, Héctor  
Tesorieri, José V.  
Toro, Ricardo  
Vanasco, Julio A.  
Velloso Colombres, Manuel F.  
Vergara, Amado  
Villafañe, José María  
Visca, José Emilio

Vischi, Albino  
Zanoni, Pedro P.  
Zara, Edmundo Leopoldo  
Zinny, Mario

AUSENTES, CON LICENCIA:

Andreotti, Antonio  
Antille, Diógenes C.  
Ayerbe, Lázaro Balbino  
Baulina, Angel V.  
Beretta, Eduardo  
Brugnerotto, Juan N. D.  
Cérom, Eduardo  
Cuminetti Correa, Alcides D.  
Fernández, Baltasar S.  
Gericke, Carlos Gustavo  
González Funes, Tomás  
Graña Etcheverry, Manuel  
Ianspolsky, Angel  
Jofré, Hernán R.  
Kees, Gaspar  
Marotta, José  
Montiel, Alcides E.  
Palacio, Ernesto  
Polizzi, Juan  
Repetto, Agustín  
Ricagno, Roberto  
Rodríguez, Manuel  
Rougier, Valerio S.  
San Millán, Ricardo Antonio  
Tejada, Ramón Washington  
Tommasi, Victor M.  
Urdapilleta, Oscar C.

AUSENTES, CON AVISO:

Maineri, D. Jacinto  
Ponce, Angel L.  
Solana, Emilio  
Uranga, Raúl L.  
Valdez, Celestino

SUMARIO

1.—Versiones taquigráficas.

2.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones oficiales.

II.—Despachos de comisión.

III.—Peticiónes particulares.

IV.—Proyecto de ley del señor diputado Osinalde: subsidio a la Sala de primeros

auxilios Del Carmen, de Villa Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos.

V.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez Luque: incorporación al régimen de las leyes de obras públicas 12.576 y 12.815, de créditos para adquisición de terreno, estudios, proyectos, construcciones y habilitaciones de varias obras en la provincia de Córdoba.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza: incorporación al régimen

de las leyes de obras públicas 12.576 y 12.815 de créditos para obras de varias instituciones en la Capital Federal y de la provincia de San Juan.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado Allub: ampliación de crédito para obras en termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

VIII.—Proyecto de ley de los señores diputados Moreno y Giménez Vargas: subsidio a la Municipalidad de Guaymallén, provincia de Mendoza.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Villafañe: aumento de subsidio con destino a sostenimiento del hospital a cargo de la Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul, de La Rioja.

X.—Proyecto de declaración del señor diputado Martínez Luque: inclusión en el plan de obras públicas para 1947, de partidas para construcciones de edificios de escuelas nacionales de Las Acequias, Villa María y Bell Ville, provincia de Córdoba.

XI.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:

1.—De los señores diputados Tesorieri y Ottonello: inclusión en las sesiones extraordinarias de los proyectos de ley sobre modificaciones a la ley 9.688, de accidentes de trabajo.

2.—Del señor diputado Díaz sobre otorgamiento por los poderes provinciales y autoridades municipales, de sueldo anual complementario a los respectivos servidores.

3.—Del señor diputado Frondizi y otros sobre interpelación al señor ministro de Justicia e Instrucción Pública relacionada con el premio otorgado por la Comisión Nacional de Cultura al libro *Proas de España en el mar magallánico*.

4.—Del señor diputado Pérez de la Torre y otros sobre investigación relativa al brote epidémico de peste en la Capital Federal.

3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Uranga, González Funes, Brugnottto, Ricagno, Montiel, Rouggier, Tejada, Fernández (B. S.), Tommasi y Urdapilleta.

4.—Manifestaciones del señor diputado Tesorieri: homenaje a obreros estadounidenses.

5.—Proyecto de declaración del señor diputado Mosset Iturraspe: inclusión en sesiones extraordinarias de los proyectos de ley sobre derogación de la ley 4.144, de extrañamiento de extranjeros. Continúa la deliberación interrumpida en la sesión anterior.

6.—Indicación del señor diputado Sobral sobre trámite del proyecto de ley referente a aumento de retribuciones del personal comprendido en el anexo E del presupuesto general. Moción del señor diputado Degreef para que se trate con preferencia el proyecto, con o sin despacho de comisión: se aprueba.

7.—Moción del señor diputado Visca, de preferencia para el proyecto de ley en revisión sobre Corporación Nacional de Olivicultura.

8.—Moción del señor diputado Visca, de aplazamiento del despacho de la Comisión de Legislación Agraria en el proyecto de resolución sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de ventas efectuadas por la Junta Reguladora de la Producción Agrícola. Se resuelve tratar el despacho a continuación del relativo a régimen bancario y organización económica.

9.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ratificación legislativa de decretos referentes a régimen bancario y organización económica.

—En Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre de 1946, siendo las 9:

# 1

## VERSIONES TAQUIGRAFICAS

**Sr. Presidente (Guardo).** — Queda abierta la sesión con la presencia de ochenta señores diputados.

Si no se hace observaciones a la versión taquigráfica correspondiente al día 28 de noviembre se autenticará y archivará.

**Sr. Martínez Guerrero.** — Pido la palabra.

Quiero hacer la rectificación de un concepto, aunque en realidad no la tengo que hacer yo sino el diputado al que —estoy seguro— por el momento de la noche en que hizo su exposición le pasó inadvertido. Se trata de una sola palabra, pero que quiere decir una cosa distinta de la que ha tenido intención de expresar el señor diputado Benítez. No quiero que las personas que se ocupan de estos asuntos de aeronavegación en Norte América, aquí puedan pensar que los diputados argentinos no conocen a fondo estas cuestiones. Y me adelanto a decir que no hice de inmediato la rectificación porque no oí al señor diputado.

En la página 5716 (\*) del Diario de Sesiones se lee: «Había solamente en el país 4 aeroclubes de aviones a motor y 36 sin motor. Actualmente tenemos 55 con motor y 81 sin motor. De 50 pistas en 1943, se ha pasado a 120 pistas». Es un error hablar de 120 pistas. Existen aeródromos con pista. Sería como referirse

(\*) Corresponde a la página 671 del tomo VII de Diarios de Sesiones de 1946.

a la hélice de un aeroplano cuando en realidad se ha querido hablar de la cola. Por eso le pido al señor diputado Benítez que tenga la gentileza de rectificar esto, porque no hay en realidad sino aeródromos y una sola pista en el país, como lo dije el día del debate.

**Sr. Benítez.** — Pido la palabra.

Entiendo, señor presidente, que las rectificaciones deben hacerse al acta y no a las consideraciones que ha hecho cada diputado, porque eso sería reabrir el debate. El señor diputado Martínez Guerrero debe rectificar en el acta lo que aparezca transcrito mal de lo que él ha dicho, pero en cuanto a lo que yo he manifestado y me hago responsable, lo he dicho sobre la base de los elementos de juicio que yo tengo. Creo que no se trata de reabrir nuevamente el debate, porque no es la oportunidad.

**Sr. Martínez Guerrero.** — Quise hacer esta rectificación al día siguiente, porque como desgraciadamente no oigo bien, no pude aclarar en el momento de hacer su manifestación el señor diputado Benítez; pero el señor presidente me dijo que yo ya había hablado, y acaté. De modo que ésta es la primera oportunidad que tengo para pedir que se haga la rectificación, porque el error afecta al buen nombre de todos nosotros. Queda a salvo, entonces, el nombre del sector de la Unión Cívica Radical, que ha dicho la realidad.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Está hecha la aclaración.

**Sr. Bustos Fierro.** — Pido la palabra para una pequeña aclaración del acta, en la página 5617 (\*) del Diario de Sesiones.

Hago la advertencia que es una aclaración intrascendente pero que, con todo, la creo necesaria.

En un pasaje de mi exposición, al final, refutando las observaciones del señor diputado Frondizi, expresa el acta, que yo le habría atribuido al nombrado señor diputado la expresión: «Maldito sea quien no se contradiga una vez al día». Cuando la utilicé, no la atribuí por cierto al señor diputado Frondizi sino a su autor, que es Voltaire.

No quiero que el señor diputado Frondizi me pueda imputar que lo haya constituido en plagario de Voltaire. Por ello hago la aclaración.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Queda hecha la aclaración.

Si no se hacen otras observaciones, se dará por aprobada la versión taquigráfica del día 28 de noviembre.

—Se da por aprobada la versión taquigráfica de la sesión del día 28 de noviembre.

(\*) Corresponde a la página 573 del Tomo VII de Diarios de Sesiones.

2

ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Guardo).** — Se va a dar lectura de los asuntos entrados.

I

Comunicaciones oficiales

El señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero solicita se incluya en el presupuesto de gastos de 1947; una partida para compra de terreno y construcción de edificio para la escuela nacional de comercio de la capital de la provincia. (*A las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda.*)

—El comisionado municipal de Bahía Blanca solicita se aumente la subvención que percibe el hospital municipal de esa ciudad. (*A las comisiones de Higiene y Asistencia Médicosocial —especializada— y de Presupuesto y Hacienda.*)

II

Despachos de comisión

TERRITORIOS NACIONALES:

En el proyecto de resolución del señor diputado Aráoz por el que se piden informes al Poder Ejecutivo sobre la división del territorio nacional de Los Andes.

COMISIÓN ESPECIAL REVISORA DE DECRETOS LEYES:

En el proyecto de ley sobre creación de los Tribunales del Trabajo e institución de la instancia administrativa obligatoria para accidentes del trabajo.

—Al orden del día.

III

Peticiones particulares

La Asociación ex Alumnos Huérfanos de Militares de la Capital, formula consideraciones relacionadas con el proyecto de ley en revisión sobre creación del Instituto Social Militar Doctor Dámaso Centeno. (*A las comisiones de Defensa Nacional, de Instrucción Pública y de Presupuesto y Hacienda.*)

—Obreros y empleados de los talleres del Ferrocarril Central Argentino, de Rosario, solicitan la sanción de los proyectos de ley sobre reformas a la ley 10.650 de jubilaciones. (*A la Comisión de Asistencia y Previsión Social.*)

—La Federación Agraria Argentina, de Tandil, solicita la sanción del proyecto sobre aumento de precio del lino y del trigo. (*A la Comisión de Industrias y Comercio.*)

—El Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos; La Cámara Argentina de Comercio y La Asociación de Propietarios de Bienes Raíces, formulan consideraciones relacionadas con el plan quinquenal. (*En Mesa de Entradas a los efectos de posterior destino.*)

ñores diputados. Cuando yo pregunté a cuánto ascendía el beneficio fiscal de la comercialización de las cosechas, los señores diputados Benítez y Klix López, dijeron que se lo preguntáramos al Poder Ejecutivo o al ministro de Hacienda de la Nación, quienes darían el informe. Este despacho tiene por objeto recabar ese informe que nosotros consideramos importante. Si ayer se ha contestado por conducto del miembro informante del sector de la mayoría en la forma que acabo de referir, sería poco formal que ese sector postergara ahora este asunto que tiende, precisamente, a obtenerlo.

**Sr. Decker.** — No existe contradicción entre la votación del día de ayer y la de hoy, pues cuando se votó aquella moción no se sabía a ciencia cierta si se terminaría el debate sobre un asunto tan importante para la Nación como es el que se refiere a todo el edificio bancario y financiero de la Nación, que involucra en sí el problema que hoy es motivo de este pequeño debate como una parte del mismo.

Considero, pues, que se podría tratar inmediatamente después de finalizado el debate sobre el asunto bancario. Hay además un interesante detalle de técnica, que ha puesto de relieve el señor diputado Visca, y que es el de no postergar por mayor tiempo el debate que quedó cortado ayer a las 21 y 30.

**Sr. Presidente (Guardo).** — La proposición del señor diputado por la Capital modifica, entonces, la del señor diputado por Buenos Aires. El señor diputado por la Capital propone que se trate el asunto después del despacho sobre ordenamiento bancario y en cambio, el señor diputado por Buenos Aires, que se considere al terminar el plan de trabajo aprobado.

**Sr. Decker.** — Es una simple consideración. Si la Cámara desea votar la moción del señor diputado Visca, no hago hincapié en mi moción. Tan sólo he querido poner de manifiesto que no existe contradicción entre las manifestaciones del día de ayer y las de hoy.

**Sr. Visca.** — Por la unidad del debate, mantengo la moción.

**Sr. Rubino.** — Pediría al señor diputado Visca que aceptara la moción del señor diputado Decker en el sentido de que se trate después del ordenamiento bancario, ya que el argumento de que se va a perder la unidad del debate queda así sin ninguna consistencia.

**Sr. Orozco.** — Apoyo la moción del señor diputado Decker.

**Sr. Presidente (Guardo).** — El señor diputado por la Capital hace moción en el sentido de que este asunto se trate inmediatamente después del despacho sobre ordenamiento bancario.

**Sr. Visca.** — Por la unidad del debate, insisto en mi moción de que se trate a continuación del plan.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Se va a votar la moción del señor diputado por Buenos Aires, para que se trate a continuación del plan de labor ya aprobado.

— Resulta negativa de 67 votos; votan 98 señores diputados.

**Sr. Visca.** — La unidad del plan es como la unidad del bloque.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Se va a votar ahora la moción del señor diputado por la Capital para que se trate inmediatamente después del despacho sobre ordenamiento bancario, el contenido del orden del día 199.

— Resulta afirmativa de 77 votos; votan 98 señores diputados.

## 9

### REGIMEN BANCARIO Y ORGANIZACION ECONOMICA

**Sr. Presidente (Guardo).** — Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ley referente a régimen bancario y organización económica.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Mosset Iturraspe.** — Debo confesar, señor presidente, en primer término, lo difícil que es fundar el voto en un asunto de esta naturaleza y de esta importancia dentro de un término angustioso de media hora.

Jamás en la vida del país se ha hecho una reforma de orden económico y financiero como ésta. Anula en mi concepto, los derechos y garantías que consagra la Constitución nacional y declina en el Poder Ejecutivo las prerrogativas más inalienables del Congreso.

En cualquier época, en este país, y en cualquier parlamento libre del mundo, proyectos como éstos llevarían días y semanas de discusión y de estudio; pero estas iniciativas se sancionarán así. La forma está de acuerdo con el fondo. Entiendo por ello que es deber en esta hora como en ninguna otra, salvar por entero mi responsabilidad.

Al sancionarse en esta Cámara el proyecto de declaración que establecía haber causa para la formación de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, vinculé dicho pronunciamiento con estas iniciativas y anticipé lo que la nueva organización bancaria entrañaba para el futuro de la República.

La política económica y financiera del gobierno defacto y su armamentismo desmesurado han llevado al país a una situación que no podía continuar. Por primera vez se había hecho uso de los fondos del Banco Central y el propio presidente de la República había decla-

rado que no podía pagar los sueldos de la administración. Las nuevas autoridades, herederas de la revolución de junio, decidieron, para poder desenvolverse, la necesidad de imponer nuevos decretos leyes y todos los gravámenes posibles e imaginables a la renta, a las ganancias eventuales, etcétera, aunque arrebatara a los estados federales, a nuestras provincias, sus propias y mejores fuentes de recursos, y, lo que es más grave, apropiarse de más de nueve mil millones de pesos depositados en los bancos que pertenecían y pertenecen a las provincias y a los particulares. Es ese despojo el que hoy se pretende consumir por la Honorable Cámara.

A estos planes respondió lo que dió en llamarse la nacionalización del Banco Central, y la garantía de los depósitos bancarios; y como si todavía no fuera bastante, se buscan miles y miles de millones y se crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. No contentos con apropiarse de los dineros depositados, se decide tomar toda la producción y toda la riqueza argentina, imponerles precios y venderlas a los consumidores a precio mayor, quedándose también el gobierno con la diferencia. Nadie podrá negar la verdad de lo que afirmo —los filósofos y economistas de la revolución dirán lo que quieran—. Una vez más se podrá repetir que los fines justifican los medios.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara el señor vicepresidente 1º, don Silverio Pontieri.

Volviendo a la nacionalización del Banco Central, debo declarar que no defiendo la organización que tenía ni el desenvolvimiento de su acción. Me limito a señalar que el gobierno tenía el control de ese banco y que no es exacto lo que se ha afirmado por el señor presidente, que primaran en él la banca extranjera, porque no podía hacerlo. La banca mixta y privada han sido desalojadas, el gobierno nacional se ha quedado con las ganancias y reservas existentes, que eran mucho mayores que el capital; los obliga a dejar en garantía por depósitos en cuenta corriente y caja de ahorros por más de 1.800.000 pesos, limitándose a ofrecer un bono por el importe originario del capital aportado.

En un país que tiene una organización constitucional como el nuestro, no se puede proceder así.

Anotó, sin embargo, un hecho que tendrá que ser explicado: es el que se relaciona con la forma tan distinta como se ha procedido a liquidar con los accionistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y me pregunto si acaso los accionistas particulares de dicho banco no son iguales en derecho a los accionistas de las demás instituciones de crédito del país.

El gobierno ha nacionalizado el Banco Central y ha tomado el dinero de sus depósitos

porque no podía esperar más. El Banco Central ahora es nuestro —ha dicho ufano el señor presidente de la República—; ahora puedo desenvolverme, no como antes, en que se dependía de terceros.

¿Pero es que el Estado es todo y las provincias y los particulares no juegan rol en este asunto? La razón de Estado que se ha esgrimido así es la negación de la democracia en cualquier país de la tierra.

La nacionalización del Banco Central fué un despojo contrario a los preceptos de la Constitución nacional. Ya tuve ocasión de demostrar en esta Cámara cómo se ha hecho en Gran Bretaña y Francia, con procedimientos democráticos y con respeto a los derechos de propiedad y a las normas y preceptos parlamentarios.

Las autoridades defacto no han podido, y tampoco puede el Congreso, legalizar los decretos leyes preparados con el designio de apropiarse de los depósitos bancarios.

El Congreso, al dictar el Código de Comercio, puede legislar sobre bancos, supeditado, desde luego, a las normas que la Constitución determina. Es así como puede crear un banco nacional, hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; pero como las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, tienen que respetarse sus derechos y entre ellos, los expresamente consagrados, como el de crear bancos sin más limitación que la de emitir billetes sin autorización del Congreso.

Legislar sobre bancos no quiere decir apropiarse de los depósitos obtenidos por las instituciones en marcha. Podrá el Congreso dictar nuevas normas y exigencias sobre los depósitos bancarios, su control, etcétera, pero de buenas a primeras quitárselos a la banca mixta y particular, obligarlos a que se transfieran al Banco Central, convirtiéndolos en sus mandatarios, con prohibición de utilizar los fondos sin su permiso expreso, pero no puede hacerlo dentro de un régimen de respeto a los derechos y garantías en que el gobierno debe desenvolverse.

No basta decir que se da la garantía por el Estado. La Nación no puede tomar las cosas de terceros con la sola promesa o formalidad de dar su fianza. Yo no sé cómo puede el Congreso prestarse a legalizar dicho procedimiento.

Piensen los señores diputados que si se extiende de este modo dicho procedimiento, nadie tendrá seguridad en sus derechos y patrimonio, pues bastaría la garantía para cualquier desapoderamiento y en las circunstancias que se quisiere. Eso sería el nuevo orden, pero no el orden jurídico asegurado por la ley fundamental de la República.

Si el Congreso, en uso de las atribuciones que tiene de dictar el Código Civil, despropia

a los particulares de sus bienes, a los arrendatarios de los derechos que ejercen, lo mismo que a los contratantes sobre mutuo, prenda y anticresis, ¿a qué quedaría reducido el ejercicio de los derechos de propiedad y las prácticas de actividades útiles?

Las provincias, que conservan todo el poder no delegado y que pueden crear bancos sin más limitación que la ya expresada, han visto de pronto allanadas sus autonomías, han sido despojadas de sus bancos, obligadas a transferir la renta, los depósitos judiciales, las garantías de concesiones y contratos y pasar en adelante a depender del Banco Central, para poder utilizar sus recursos propios y esenciales para su obra de gobierno, en base a lo cual se sancionó la Carta Federal Argentina.

Algunas provincias, como la de Buenos Aires, tenían pactos preexistentes, anteriores a la ley fundamental y que ésta se obligó a respetar, como que era de su esencia para la incorporación definitiva a la unidad nacional, y también han visto declinando a sus gobiernos, entregando sus autonomías, permitiendo el avasallamiento de su autonomía, con más las amenazas de prisiones y multas para los directores y funcionarios que quisieran resistir.

Sólo en Santa Fe se ha hecho la gestión ante la legislatura por nuestros representantes, y la mayoría oficialista, allí lo ha declinado todo: autonomía, historia y su pasado de sacrificios, en aras de esta nueva concepción del federalismo que pretende explicar el presidente a los ministros provinciales, pero que nadie lo entiende ni lo podrá alcanzar, porque los hechos son más convincentes que las palabras, aunque a diario se repitan.

No voy a caer en la ingenuidad de llevar este debate a los aspectos constitucionales y parlamentarios. Señalaré propósitos y hechos que lo concreten y la Honorable Cámara dirá honradamente si los proyectos en discusión pueden y deben ser votados, o si deben rechazarse para que en el país se restablezcan las normas democráticas y el imperio de su ley fundamental.

La nacionalización del Banco Central y la garantía de los depósitos, ha traído la creación del banco único dispensador de créditos en todos sus aspectos y modalidades y ha convertido a los bancos del país, incluso a los de la Nación, Hipotecario, de Crédito Industrial, de la Provincia de Buenos Aires, y a todos sin excepción, en simples sucursales o agencias del Banco Central. No exagero en nada lo que digo. De acuerdo a los decretos leyes que hoy se pretende legalizar, los bancos, todos sin excepción, sólo pueden prestar a sus clientes el importe de su capital y sus reservas que suman en total 798.000.000 de pesos, la mayor parte de éstos invertidos en edificios y elementos de trabajo. Queda apenas una ínfima parte de dicha cantidad para faci-

tar en créditos. Para extender sus operaciones, necesitan que el Banco Central los autorice, percibiendo éste una comisión. Por lo tanto, prestando el remanente en efectivo o del capital propio y sus reservas y percibiendo un tanto por ciento del redescuento, estos bancos no alcanzarán siquiera a pagar sus gastos generales.

El negocio bancario —llamémosle así— de estas sucursales o agencias, ha desaparecido; esa es la realidad. La apariencia mantenida hasta hoy es otra. Siguen trabajando poco más o menos como antes, disminuidos, naturalmente, por su situación y dependiendo de lo que el Banco Central les diga o que les acuerde o no el redescuento. La verdad es ésta. Y si bien es cierto que se les ha conformado diciéndoles que tendrán todo el dinero que necesiten, pueden en cualquier momento caer, y no deben olvidar que en el decreto ley que así los disminuye, se estableció como una razón de esta reforma, el haber sido factores decisivos de la inflación tan acentuada en el país.

Fácil es poder afirmar que no hay sino un banco: el Banco Central, que puede dar y quitar en la medida que lo juzgue oportuno y necesario, que puede estimular o derrumbar las instituciones existentes. Hay, pues, monopolio bancario, que el Congreso se apresta a consagrar. La forma en que se desarrolle, el tiempo lo dirá; pero entretanto, el gobierno tiene consagrado en el país el monopolio bancario.

Esta nueva organización le ha permitido al gobierno disponer de los depósitos bancarios para todos sus arbitrios financieros, planes económicos y el desenvolvimiento total de su acción. La comprobación es fácil. Todos conocen que la confianza pública de los inversores y ahorristas había sido perdida hacia el gobierno. Invoco las propias constancias de la memoria del Banco Central, correspondiente al año 1944. En ese año, sólo se pudieron colocar en el público títulos a largos plazos, por 44.000.000 de pesos, los temores hicieron que los inversores se decidieran por los títulos a corto plazo y por las letras de tesorería.

¿Cómo, entonces, va a hacerse creer que de buenas a primeras por sólo haber marcado el almanaque la fecha del 4 de junio la opinión pública ha cambiado substancialmente y miles y miles de millones de pesos que se requerían apresuradamente en la Casa de Gobierno, y que se lanzaran títulos a largo plazo para proveerlos, han sido absorbidos por el público? No, señor presidente. La verdad es otra. Todo lo que se ha venido haciendo en el país en estos aspectos lo ha sido con la plata de los depósitos bancarios. Los 2.000.000.000 de pesos en bonos hipotecarios destinados al rescate de las cédulas fueron tomados, en su mayor parte, de los bancos, de los dineros de los depósitos; el Banco Central no podía tener el menor interés en que

hubiera tomadores en el público; así se ha disminuído la carga de los intereses, y el Banco Hipotecario presta al 4,75 lo que le cuesta 2,80, y ya va en ello una ganancia importante para el Banco Central.

No hay ya interés en preparar la plaza, como siempre se hacía para la colocación de los valores oficiales. Ahora se manda una circular a los bancos asignándoles una suma por la que deben comprar títulos, y a lo que se llama prefinanciación, diciéndoles que subsidiariamente los pueden vender a los particulares. Así hicieron y lo dijeron bien categóricamente en comunicados oficiales al venderse la primera partida de 141.000.000 de pesos en títulos para pagar el descubierto del gobierno con el banco. Con los dineros depositados se han hecho las conversiones en títulos del 4 al 3 %, y el del 3 ½ al 3 %. El gobierno careció en absoluto de recursos propios para afrontar una operación de tamaño envergadura, y tener listos los fondos para los rescates. Con los dineros depositados, se ha hecho la transformación de la deuda externa en interna. De ahí han salido los 415.000.000 pagados por los teléfonos. De ahí saldrán los dineros para el empréstito a España, para la reconstrucción de San Juan, para la empresa mixta de los ferrocarriles.

Tengo la absoluta seguridad que si la Honorable Cámara dispusiera una investigación comprobaría que ya más de 4.000.000.000 de pesos han salido dispuestos por el Banco Central, de los depósitos bancarios y que, en las instituciones de crédito están los títulos a que he hecho referencia, y los créditos por desembolso de las conversiones, que importan más de 360.000.000 de pesos, los créditos por diferencia de cotización de títulos para el rescate de la deuda externa, que importan 45 000.000, cuentas de teléfonos, etcétera.

Además, el gobierno se reserva el derecho de disponer hasta el importe del 10 % de los depósitos bancarios para la defensa de las cotizaciones de los títulos, en previsión de su baja, y ya tenemos en esto la amarga experiencia del gobierno defacto, que vivió sosteniendo los valores en la bolsa, con el importe de los descuentos bancarios, y que paladinamente así lo confesaba.

Comprendo, entonces, el interés que hay en esta Cámara, por parte de la mayoría, en salvar la situación, pues si ésta resolviera en un instante desaprobando los decretos leyes, el gobierno se vería obligado a la devolución de los depósitos utilizados en la forma que he mencionado y esto daría por tierra con el nuevo orden que se quiere presentar. Desde luego, mientras el régimen de las importaciones no demande fuertes extracciones en los bancos, se podrá seguir. El gobierno cuenta con graduar esas importaciones y, además, con la facultad de emitir que tiene

el Banco Central, lo que constituye el más grave de los errores en que se ha podido incurrir, confiriendo a una sola institución la facultad de manejar el crédito y de emitir moneda.

A diario se pretende mostrar una situación totalmente distinta de la que encierra la realidad.

En los discursos que de continuo se escuchan, se habla de las deudas y del oro a nuestro favor. Es necesario restablecer la verdadera situación.

El oro y divisas que tenemos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y algún otro país, constituyen la garantía de la moneda argentina. No son dos valores distintos el papel moneda y el oro y divisas. Estos respaldan a aquél. Que la gente lo entienda bien. Si la garantía desaparece o disminuye, la depreciación es mayor en el signo monetario argentino.

La verdadera garantía de la moneda argentina se debe establecer en relación al oro existente y a las divisas con garantía a oro; y desde luego, siempre que el oro y divisas estén libres de toda interdicción.

Por consiguiente, puede afirmarse que el respaldo de la moneda argentina es muy inferior en realidad a los porcientos que a diario se repiten, y tanto más es cierto esto, que las libras bloqueadas en Inglaterra tienen, de acuerdo al convenio recientemente celebrado, un cuarto de siglo para quedar totalmente libres.

No hay ni que pensar sobre el valor de la moneda, si se acerca la hora de cambiar a la vista los billetes del banco por oro, como lo establece el artículo 29 del proyecto. Además, nadie se llama a engaño, la disminución del signo monetario es evidente y los cambios internacionales y la carestía de la vida lo demuestran.

No puedo extenderme en las consecuencias que toda esta política del gobierno y del Banco Central han traído al país.

La inflación es enorme y toda esta vorágine de negocios y de movilización de la propiedad, lo comprueba del modo más acabado. Felizmente para el país, aunque a la inflación se la niegue en las esferas oficiales o se la pretenda reducir, ha llegado ya al convencimiento de todos.

Con la nueva organización bancaria y el régimen de los cambios, el gobierno controla y absorbe todo. Después de aprobados estos decretos leyes, nadie negará la total dependencia de los organismos del Estado.

Se ha creado también el Instituto de Promoción del Intercambio, que comprará y venderá toda la producción y la riqueza argentinas y revenderá todo lo que se importe al país. El instituto fija los precios de compra y de venta y se guarda la diferencia que esto le produce. Su capital inicial sale naturalmente del Banco Central y ha tenido recientemente un fuerte aporte. Recordarán los señores diputados que

había un convenio de caballeros entre nuestro país y Gran Bretaña, y que los productores entregaban las carnes a la espera de un aumento del precio. Inglaterra cumplió, por su parte, el convenio de caballeros entregando 5.000.000 de libras esterlinas, pero los productores se quejan del gobierno, que ha conceptuado caballeresco entregar esos 5.000.000 de libras al instituto, cuando eran de ellos, totalmente de ellos.

Si la Cámara vota la legalización del instituto, de hoy en adelante la agricultura, la ganadería, la minería, la industria, todo, todo, quedará en manos de esa dependencia, a la que hay obligación de venderle, y fijará precio. Ella importa, ella exporta, vende cambios. El productor y el consumidor argentinos tienen todos los días que preguntarse, al levantarse, qué diferencias se toma el instituto con el resultado de su trabajo, de su esfuerzo y de su acción. Hoy mismo recibe el trigo a 17 pesos y lo vende a 30 y 35; el lino a 30 y lo vende a 95, y se guarda las diferencias.

El dueño del campo sigue, sin embargo, soportando la reducción del 20 % en el precio de los arrendamientos. Si la rebaja tiene que hacerse cuando el trigo y el lino valen esos precios, ¿cuáles debe esperar para cobrar su modesta renta sin descuento? ¿Cuando el trigo valga 50 y el lino 200 pesos?

Y todavía se sigue repitiendo que la tierra es un bien de trabajo y no de renta. Será de renta para el gobierno y de trabajo para el colono. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Dentro de nuestro régimen constitucional el Congreso discute y vota anualmente los impuestos y gastos. Dos mil, tres mil, cuatro mil millones se invierten por ley y previo examen y aprobación de todas y cada una de las partidas del presupuesto. En cambio, el Congreso declinará en el instituto sus facultades inalienables y entregará maniatados al productor y al consumidor argentinos, a los cuales se substraerán miles y miles de millones de pesos. La libertad de trabajo, el derecho de propiedad, la libre iniciativa, todo, entregado a esa corporación, la que, al decir del presidente de la República, tiene piedra libre para proceder.

¿Algún Parlamento del mundo ha hecho alguna cosa igual? Interesaría mucho que se señalaran los precedentes. Yo, por mi parte, sólo puedo invocar la ley que se dictó en la Alemania de Hitler en 1933.

Puede estar segura la Honorable Cámara que no exagero nada y que el gobierno, al absorber totalmente la economía argentina por medio del instituto, dispondrá de miles y miles de millones de pesos que puede gastar sin ningún control del Congreso, ni de nadie.

El día 21 de octubre de este año, el presidente leía en este recinto el plan quinquenal y

anunciaba toda clase de impuestos: para la enseñanza primaria, secundaria y técnica; para el estatuto universitario; para la inmigración y colonización; para la salud pública; para la caza y para la pesca, etcétera. Y como si todavía ello no fuera bastante, se reservaba el derecho de aumentar hasta en un 100 % los derechos de aduana. También se proponía disponer de los fondos del Banco Central, emitir títulos o hacerse de recursos en la forma que estimare conveniente hasta por 1.332.000.000 de pesos por año, sin más obligación que la de dar cuenta al Congreso de los hechos consumados.

No crea la Cámara que pretendo anticiparme a la discusión del plan quinquenal. Sólo quiero señalar que antes del transcurso de un mes el señor presidente les hacía casi en tono de confidencia a los ministros de Hacienda de las provincias, la declaración de que ya no va a necesitar de esos recursos, que los va a sacar del Instituto de Promoción del Intercambio. No menciono este hecho como prueba de la inestabilidad en la concepción de planes que en menos de un mes ya no se necesitan esos 1.500.000.000 de pesos por año y que todavía sobran 1.200.000.000 más; lo hago al solo objeto de dejar comprobado que el instituto dará los miles de millones que ha asegurado, a costa naturalmente del trabajo, de la libre iniciativa, de la libertad y hasta de la muerte de las garantías fundamentales de la República.

Por todo ello, votaré en contra de los despachos que están a nuestra consideración. Mi disidencia es total con los mismos. Mis distinguidos colegas de la oposición sólo se limitan a una disidencia parcial. No puedo seguirlos en esa posición. La concepción totalitaria, aunque se la niega...

**Sr. Santander.** — Si me permite el señor diputado...

Creo que el señor diputado ha interpretado equivocadamente el discurso que he pronunciado para fundar mi disidencia.

Si hemos hecho la disidencia parcial, ha sido en la inteligencia de que comprendíamos a todo el instrumento legal que se da al Estado. Ya hemos apreciado en qué sentido consideramos la nacionalización del Banco Central. El hecho en sí es para nosotros intrascendente; lo grave es precisamente lo que está señalando el señor diputado, es decir, que en vez de una nacionalización de esta institución, se ha llegado a la estatización para hacer de ella un simple instrumento del presidente de la República.

**Sr. Mosset Iturraspe.** — Me felicito de la aclaración del señor diputado Santander, porque en mi concepto toda la organización del Banco Central no sólo significa la supresión del régimen de libertad establecido en nuestra Constitución, sino también que hiere de muerte esos proyectos y se acuerda en los mismos facultades

extraordinarias que no se remedian con una reforma parcial. Para mí los proyectos en discusión no resisten el más ligero análisis por más buena voluntad que se tenga y nunca tranquilizaría mi conciencia sabiendo el porvenir funesto que depararán a la Nación los decretos leyes que hoy consideramos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Pontieri). --- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Peña Guzmán.** — Estamos considerando, señor presidente, un conjunto de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, con respecto al régimen bancario argentino, cuyos decretos fundamentales abarcan la nacionalización del Banco Central, la transferencia de los depósitos personales de los bancos particulares al Banco Central, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y otros decretos no tan importantes como los citados.

Cabe preguntarse en primer lugar, cuáles son las razones de urgencia que han motivado al Poder Ejecutivo, en marzo del corriente año, en vísperas de reunirse el Congreso argentino, a decretar esta serie de medidas que configuran una nueva estructuración de nuestro régimen bancario.

¿Acaso existía un peligro inminente de que bancos particulares que recibían depósitos de los habitantes del país, pudieran estar en vísperas de un serio colapso? ¿Acaso no tenía el Banco Central su presidente, vicepresidente y directores nombrados por el Poder Ejecutivo con facultades de inspección y control de todos los bancos del país, a efectos de asegurarse de su liquidez y, con ello, garantizar el normal desenvolvimiento del crédito público?

Por otro lado, en lo que respecta al aspecto financiero, debemos ver la realidad en cifras.

El estado de los bancos al 30 de septiembre de 1946, daba un total de depósitos de todos los bancos del país de 10.500.000.000 de pesos. De este total, 4.100.000.000 han sido afectados al Banco de la Nación Argentina; y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el segundo del país, 1.308.000.000 de pesos. Si sumamos los depósitos de los bancos del Estado, provinciales y municipales, llegamos a la conclusión que alrededor de un 60 % de depósitos están en bancos oficiales, es decir, que tienen ya la garantía del Estado y no puede existir el menor riesgo para los depositantes. Sobre el resto apenas el 15 % corresponden a bancos de capital extranjero, cuyo monto total de capital suma alrededor de 50.000.000 de pesos y que con las reservas podrá llegar a 65.000.000.

Quiere decir, entonces, que el control de créditos, mediante la organización del Banco Central, mediante la influencia preponderante de los depósitos de los bancos oficiales, da una idea cierta de que no existía la posibilidad de

que hubiera la inminencia de una catástrofe bancaria, que obligara urgentemente al Poder Ejecutivo a tomar medidas de esta naturaleza, aun antes de que el Congreso se reuniese.

¿Cuáles son las modificaciones introducidas en este nuevo régimen bancario, en relación al anterior sancionado en el año 1935? Podemos sintetizarlas en tres: la nacionalización del Banco Central, el nuevo sistema de ley de bancos con la transferencia de depósitos y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

Para cada uno de ellos se han dado razones distintas: para la nacionalización, se ha aducido la soberanía financiera del país; para la transferencia de los depósitos, la garantía de los fondos de los depositantes, y para el Instituto de Promoción del Intercambio, la promoción de la exportación y el desarrollo de la industria. Pero todo esto no es más que una cortina de humo. No existen tres razones distintas, sino una sola, como lo voy a demostrar: la unificación de todo el crédito en manos del Poder Ejecutivo para usarlo en forma discrecional.

Este uso discrecional del crédito, así como ha llevado a la inflación hasta ahora, significa un peligro más inminente, porque de aprobarse este decreto, la inflación seguirá un curso alarmante, que repercutirá en la situación financiera del país.

Con respecto a la nacionalización del Banco Central, entendemos que en buen sentido, nacionalización es muy distinto a una estatización y que aquélla es muy conveniente para el país. No es una cuestión revolucionaria ni novedosa. Los tratadistas más renombrados en materia bancaria reconocen este hecho. Así, Kisch y Elkin y Kemmerer —que fundó gran parte de los bancos centrales en América del Sur— consideran inadmisible el control de los bancos centrales por los bancos particulares.

Por otro lado, es evidente que el Estado cada vez ha tenido mayor injerencia sobre el control financiero, ya sea nacionalizando los bancos de sociedades mixtas.

El primer banco nacionalizado ha sido el Ryksbank de Suecia en 1668; el segundo, el de Rusia, fundado en 1860. Pero hay actualmente muchas naciones que tienen Banco Central nacionalizado, como Finlandia, Dinamarca, Bulgaria, Letonia, Australia, Nueva Zelandia, Canadá, China, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, y últimamente Francia e Inglaterra.

Las nacionalizaciones en Dinamarca, Nueva Zelandia y Paraguay, se realizaron en 1936, y en Canadá en 1938. Funcionan sociedades mixtas en Méjico, Colombia, Chile, Perú, Italia, etcétera.

Veremos cuáles son las condiciones de nacionalización y la forma tan distinta en que se ha encarado en el país.

Estados Unidos, primer país que en América creó la institución del Banco Central, en 1913.

por intermedio de la ley bancaria, dividió el país en doce zonas e instituyó en cada una un Banco de Reserva Federal, absolutamente privado, pero que ejercía funciones de banco central al absorber parte de las reservas de los distintos bancos del país y ejercer una fiscalización sobre la liquidez de los mismos.

Sin embargo, esta organización privada no pudo soportar con éxito la crisis de 1929 y obligó a medidas de emergencia. Con el advenimiento del presidente Roosevelt se creó la junta de gobernadores del sistema de reserva federal nombrado directamente por el Poder Ejecutivo, pero que debía ser mediante el consejo y el acuerdo del Senado del país. Esa junta de gobernadores daba su conformidad para el nombramiento de los presidentes de los distintos bancos de la reserva federal y al mismo tiempo intervenía íntegramente en la formación del comité federal de operaciones del mercado libre que regulaba el mercado de valores del país. Sobre doce miembros incluyendo siete gobernadores del sistema de reserva federal. Quiere decir, que en los Estados Unidos el Estado ha tomado intervención mediante la fiscalización del sistema bancario con un organismo nombrado por el Poder Ejecutivo, pero a propuesta y con acuerdo del Congreso de la Nación; y ha tomado esta medida descargando la responsabilidad sobre siete miembros para no dejar en una sola persona la responsabilidad, porque el manejo de las finanzas y de la economía del país es tan enorme que es necesario que exista un cuerpo consultivo como en este caso, que es de siete miembros, integrado por personas que deben ser de absoluta competencia y responsabilidad en cuestiones bancarias y financieras.

El problema de la nacionalización del Banco Central es un problema que tiene en la forma como se ha realizado en la Argentina muchos inconvenientes y muy graves.

Es necesario recordar que en todas las partes del mundo los gobiernos son los principales clientes de los bancos cuando no saben cuidar sus finanzas y están con perpetuos déficit en sus presupuestos. Es así como se ha hecho notar que la gran mayoría de los bancos centrales del mundo tienen siempre que soportar la presión de los gobiernos, siempre voraces y deseosos de nuevos créditos. Un caso especial es el caso del Banco de Francia, porque significa y condensa toda una política nefasta de los déficit del presupuesto que han desorganizado las finanzas de ese país.

El Banco de Francia en el año 1926 a raíz de los sucesivos pedidos de dinero hechos al Banco por parte del Poder Ejecutivo, había llegado a la suma de un préstamo total de 38.000.000.000 de francos. Esta situación obligó a un convenio entre esta institución de crédito y el Poder Ejecutivo, por el cual éste aceptaba como límite para sus pedidos de fondos la cantidad de

3.200.000.000 de francos; y se hizo una revaluación del oro para pagar lo que se debía al banco. Sin embargo, nueve años después, a raíz de cuatro años de déficit fiscales, el gobierno se encontró en otra situación difícil y necesitaba fondos. Había empapelado con documentos a los bancos particulares e insistía en que el Banco Central le redescantara esos documentos. El banco, no solamente en virtud de lo convenido en 1926, sino también dándose cuenta de la política inflatoria que estaba realizando el gobierno, se negó en principio a conceder crédito alguno al gobierno del país; pero el Poder Ejecutivo siempre tiene recursos para salirse con la suya: en este caso especial removió al gobernador del Banco de Francia, y los demás directores se sometieron al pedido del Poder Ejecutivo, con la única condición de que se diera amplia publicidad a los préstamos para que así el público pudiera controlar y responsabilizar al gobierno por la política inflatoria en que estaba embarcando. Sin embargo, en 1938, tres años después, el gobierno había pedido al Banco de Francia la cantidad de cincuenta mil millones de francos y debía volver a otra revaluación para poder pagar.

Este antecedente del Banco de Francia nos revela el peligro inminente que existe de que el Estado, como principal cliente y principal interesado en obtener fondos, use del Banco Central para hacer frente a sus déficit de presupuestos que lleven al país a una situación de inflación y crisis financiera. De ahí que el problema fundamental es evitar este absoluto poder del Ejecutivo sobre el Banco Central, y la única forma de hacerlo es mediante el contralor legislativo.

Ya hemos citado el caso de Estados Unidos, donde los gobernadores del sistema de reserva federal son elegidos por el gobierno con acuerdo del Senado.

En Finlandia, el presidente del consejo y varios miembros de la junta de gerentes son nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los supervisores bancarios de la Dieta, que es la Legislatura. Tenemos así, el caso de un Parlamento que tiene sus supervisores bancarios que son los que aconsejan al Poder Ejecutivo sobre el nombramiento de los funcionarios de mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas del país.

En Suecia, el Reichstag elige a todo el directorio del Banco Central, salvo el presidente, que es designado por el rey.

En Dinamarca, ocho de los veinticinco directores deben ser elegidos por el Parlamento de entre sus propios miembros. Además, el Poder Ejecutivo está representado por dos directores. Es interesante destacar que no sólo el Parlamento debía elegir ocho directores sobre veinticinco, sino que estaba obligado a elegirlos de entre sus propios miembros.

En Noruega, todos los directores son elegidos por el Parlamento. En Suiza, cinco de veinticinco directores son nombrados por el Consejo Federal y pueden ser miembros de las cámaras federales.

Estos antecedentes de las democracias que han funcionado con mayor eficiencia en Europa, nos demuestra cómo la nacionalización de los bancos centrales en esos países tenía un honda raigambre democrática en el contralor parlamentario, que es el contralor de los representantes del pueblo, con amplias facultades, sea mediante supervisores bancarios en el Parlamento o por la misma representación legislativa.

Llama la atención que en la nueva carta orgánica del Banco Central se hayan introduciendo modificaciones substanciales. En efecto, en la carta orgánica anterior, en el artículo 10 de la ley 12.155, se establecía que el presidente del Banco Central debía tener acuerdo del Senado. En la nueva carta orgánica se ha eliminado el acuerdo del Senado, pese a que el decreto de nacionalización número 8.503 establecía el acuerdo en el artículo 4º.

Por otro lado, en el artículo 9º se establece especialmente que no podrán ocupar cargos en el directorio los miembros de los cuerpos legislativos nacionales y provinciales y los de los cuerpos nacionales, con lo que se establece una incompatibilidad entre el cargo de director de banco y el de legislador.

Si tenemos en cuenta que tampoco se acepta el acuerdo del Senado, llegamos a concluir que esta nacionalización sin contralor parlamentario alguno no es nacionalización, sino sólo un discrecionalismo económico y financiero entregado directamente al Poder Ejecutivo, y significa, entonces, una verdadera dictadura económica a espaldas del Parlamento argentino.

Llama la atención que este precepto de incompatibilidad figuraba en el proyecto que el doctor Pinedo enviara al Congreso en su oportunidad, en el año 1935. Y fué la comisión de la Cámara de Diputados la que eliminó esta incompatibilidad que ahora vuelve a surgir. No es éste únicamente el punto de coincidencia de este proyecto con la idea originaria del proyecto de reactivación económica del doctor Pinedo.

Otro punto fundamental es el que se refiere al redescuento. En la anterior carta orgánica del Banco Central, en el artículo 32, inciso d), se establecían las condiciones en que debía realizarse el redescuento sobre la base de 90 días mediante dos firmas, una de las cuales debía ser bancaria, y siempre que se tratase de negociación de mercaderías y no fueran entonces documentos o papeles de favor, sino representativos de un movimiento físico de mercaderías. Con respecto a la negociación de productos agropecuarios e industriales, se establecían 180 días.

La limitación de las dos firmas, una de ellas bancaria, fué criticada en su oportunidad en el Senado por el doctor Lisandro de la Torre, quien entendía que deberían ser dos firmas de particulares de solvencia, a fin de evitar que un banco pudiera adoptar una actitud de favoritismo con respecto a determinado comerciante.

Veamos cómo se establece el redescuento en la nueva organización. En el artículo 18, inciso c), del proyecto que organiza el Banco Central, se establece simplemente: «redescantar a los bancos documentos —letras, pagarés, títulos y otros valores de inversión— provenientes de las operaciones que se hallan autorizados a realizar». Quiere decir, que ahora el redescuento se establece en forma amplia, sin ninguna restricción y ello no tiene sino una sola finalidad: la de llevar la inflación a un grado mucho más agudo y grave.

Con respecto al problema de las transferencias de los depósitos de los bancos particulares al Banco Central, cabe preguntarse cómo es posible que se haya aducido que sea para garantizar estos depósitos, desde el momento en que, como ya lo he dicho anteriormente, alrededor del 60 % del total de los depósitos en el país, se efectúan en bancos del Estado que tienen, por su carta orgánica, la garantía de la Nación. Se podrá decir que queda un 40 %; pero es necesario recordar que en la ley 12.156, de bancos, en su artículo 9º, ya se estipulaba la garantía de la Nación para los depósitos no mayores de 5.000 pesos y en caso de cooperativas, hasta de 10.000 pesos. Quiere decir, que el riesgo en los casos de bancos particulares ya tenía esa limitación en cuanto al monto.

Pero no solamente es eso, sino que la garantía mayor que evita todo riesgo es el control efectivo de parte del Banco Central, en este caso nacionalizado, sobre los demás bancos particulares, fiscalizando en forma periódica su liquidez y la calidad de las operaciones para evitar que pueda haber el menor riesgo en cuanto a la solvencia de cada uno de estos bancos.

Si sumamos estas tres condiciones: primera, el extraordinario porcentaje de depósitos en los bancos oficiales; segunda, la garantía establecida en la antigua ley 12.156, del año 1935, y tercera, el hecho de que la fiscalización efectiva es la más eficiente para evitar cualquier situación de apremio para los bancos particulares, situación en que no estaban los bancos antes de 1935. Es evidente, entonces, que la razón aducida es solamente un pretexto.

**Sr. Cooke.** — ¿Me permite una interrupción? Coincido en que esta cuestión de la garantía puede no ser fundamental, pero le voy a recordar que el artículo 9º de la ley anterior, en realidad no otorga una garantía sino un

privilegio, siguiendo un orden de prelación con referencia a otros créditos privilegiados. Así podría suceder que a ese caso no llegase a protegerlo la disposición citada.

**Sr. Peña Guzmán.** — Para terminar con este punto quiero referirme a otra forma de evitar, en cualquier caso, todo riesgo. En una situación extrema y de absoluta normalidad, el banco podría haber aumentado la cantidad y el porcentaje de reservas que los bancos particulares deben tener en el Banco Central. Por otro lado, Estados Unidos ha tomado una iniciativa en el año 1932, en tiempo de Roosevelt, muy interesante en este aspecto, que es la creación de una Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que aseguraba los depósitos hasta cinco mil dólares, cobrando a los bancos una comisión de  $\frac{1}{12}$  por ciento al año y que en 1934 llegó a tener asegurados a 13.529 bancos, que representaban el 90 por ciento del total de los bancos del país.

Veamos, entonces, que no solamente el riesgo era exiguo, sino que aun había dentro de las posibilidades de la técnica bancaria una gran cantidad de procedimientos para haber evitado llegar a este control particularizado y discriminatorio en que cada depósito en un banco es solamente a cuenta y cargo del Banco Central. Esto significa la regulación del crédito y la posibilidad de que se efectúe una discriminación sobre el crédito personal de la población del país. Se podrá decir que eso no se ha aplicado hasta ahora, pero la posibilidad existe en la conformación jurídica de estos decretos, y eso es casualmente lo que no se puede aceptar.

En lo que se refiere al aspecto monetario se han efectuado también modificaciones en la carta orgánica con respecto al ya célebre artículo 40 de la ley 12.155. Ese artículo establecía que en ningún caso el Banco Central podrá tener divisas por más del veinte por ciento de las reservas, y computarlas dentro de las mismas por más del diez por ciento. Si tomamos las existencias y las reservas al 31 de diciembre de 1945, vemos que el Banco Central, antes de estar nacionalizado, tenía un total de oro de 4.099,5 millones de pesos, que las divisas bloqueadas con garantía de oro sumaban un total de 1.570,2 millones, que las divisas sin garantía sumaban 32,4 millones. Quiere decir que había un total en el país de 5.702,1 millones de pesos. Pero no todo esto pertenecía al Banco Central: habría que descontar 1.016 millones de pesos de los certificados de custodia de oro y divisas, y las divisas en bancos particulares, que sumaban 97,4. En total quedaban en posesión del Banco Central 4.588,7 millones de pesos. Como el total de los papeles y obligaciones suman a esa fecha 5.248,3 millones de pesos, resultaba que el encaje ascendía a 87,8 por ciento.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 40, el banco sólo computaba 86,8 porque en el total de oro y divisas no debían ser computadas las divisas nada más que en una proporción del diez por ciento.

Si consideramos los 4.588 millones y descontamos los 4.099,5 millones de oro, tenemos un saldo en divisas de 489,2 millones de pesos, que es casi la mitad del límite máximo exigido por el artículo 40, que es el 20 por ciento.

Quiere decir que en este aspecto el Banco Central se ha ajustado al artículo 40, porque las divisas eran muy inferiores al 20 por ciento del total de oro y divisas en existencia en el Banco Central. Por otra parte, no computaba al encaje de los medios de pago sino exclusivamente un diez por ciento.

Veamos ahora lo que ha pasado con el nuevo banco nacionalizado.

El oro y divisas al 31 de octubre de 1946 era: oro 3.536,8 millones de pesos; libras y francos bloqueadas, 2.007 millones de pesos; otras divisas 209,9. Quiere decir que en este caso especial el total de las divisas computadas, como de pertenencia del Banco Central, significa un total de 38,5 por ciento, superando el límite máximo de 20 por ciento que establecía el artículo 40 de la ley 12.155 y su correlativo el artículo 28 del decreto ley 14.597/46.

Sin embargo, en cuanto al respaldo de los medios de pago, aparece un porcentaje superior a cien, cuando en realidad ajustándonos al 10 por ciento, el respaldo de nuestra moneda ha descendido del 86,8 a 77,7 en la actualidad.

Quiere decir que el nuevo Banco Central no ha tomado en cuenta el artículo 40 de su ley orgánica fundamental, que ha sido modificada —advirtan los señores legisladores la gravedad del hecho— por un decreto del gobierno defacto, en vísperas de la reunión del Congreso. No ha cumplido ni con el artículo 40 de la ley anterior ni con el 28 correlativo del decreto que discutimos. En vez del 20 por ciento, tiene una reserva acumulada de divisas del 38,5; y en vez del 10 por ciento, es una cantidad muy superior, bajando el respaldo a 76,7 por ciento.

¿Cómo se justifica entonces que el presidente de la República, en este mismo recinto, al referirse al plan quinquenal, haya dicho que el Banco Central combatía la inflación, que violaba el artículo 40 de su ley orgánica, emitiendo billetes sin limitación, contra divisas bloqueadas en el exterior? Estamos comprobando con las cifras de las mismas publicaciones oficiales, que si alguien ha pasado sobre el artículo 40 de la ley orgánica del Banco Central, es casualmente el nuevo Banco Central.

Y no solamente eso, señores diputados. El artículo 39 de la antigua ley y su correspondiente 27 del decreto, estipula que el oro y divisas

deberán hallarse libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al banco sin restricción alguna. En este caso especial los 2.007.000.000 de pesos en libras bloqueadas no pertenecen al Banco Central porque no son libras disponibles, ni oro que puedan tener realidad física y que pertenezcan de hecho, sin restricción alguna, al banco, sino simples créditos contabilizados en Inglaterra. No son una realidad como para computarse dentro de las existencias de acuerdo con las exigencias de la ley orgánica.

¿Y qué ha hecho, entonces, el actual Poder Ejecutivo con esta nacionalización del Banco Central para evitar esa situación? Ha modificado el artículo 40, añadiendo: «cuyo valor en relación al oro no se halle asegurado por una garantía seria». Quiere decir que lo que ha criticado al anterior Banco Central lo ha realizado ahora enmendando el artículo 40, para poder utilizar las libras bloqueadas en Inglaterra, que suman alrededor de 2.000.000.000 como respaldo de nuestra moneda.

Esa es una extralimitación evidente del artículo 40 de la ley orgánica del banco, porque estipula en forma terminante que no puede figurar como garantía de los billetes un crédito, como lo es realmente el monto de las libras bloqueadas en Inglaterra. Existe, en efecto, la garantía del oro establecida en septiembre de 1941 para evitar los perjuicios, en caso de desvaloración de la libra, pero este hecho en nada modifica su situación, porque no pertenece al Banco Central, y sobre todo no cumple con la condición de que debe ser sin restricción alguna.

Esta exposición, al demostrar la falta absoluta de fundamento de las críticas realizadas, no significa que yo pretenda hacer una defensa del Banco Central anterior, porque evidentemente del saldo de 489.200.000 de pesos, parte era realmente libras bloqueadas, pero el anterior banco emitió 1.016.000.000 de pesos en certificados de custodia de oro y divisas, y habría podido emitir más, a no ser por la competencia que le hacía el Estado en la emisión de títulos para obtener dinero para su déficit de presupuesto.

Es así cómo, observando el Boletín Estadístico del Banco Central, tenemos que en abril de este año, de 3.552.400.000 de pesos sube la existencia en oro y divisas, en el mes de junio, dos meses después, a 4.641.400.000. ¿Cómo puede suponerse, señores diputados, un aumento tan extraordinario de la existencia en oro y divisas, de 1.100.000.000 de pesos, en sólo dos meses? Es que se han retirado los certificados de custodia de oro y divisas y se han emitido billetes sobre respaldo de las libras bloqueadas.

Esta aseveración del presidente de la República fué matizada con otras igualmente equivocadas, como la que dice que en 1938, Italia, me-

dante su maniobra de precios políticos había producido 7.000.000 de toneladas más de trigo que la Argentina. Me he tomado el trabajo de examinar las estadísticas mundiales de la producción de trigo de ese año y he encontrado que Italia había producido 8.138.800 toneladas y que Argentina había producido ese mismo año 9.150.000 toneladas de trigo. Quiere decir que no existe la diferencia de 7.000.000 que se dice.

No hablemos en cuanto al porcentaje de inflación. Se dice que aquí apenas es del 35 % y que, en cambio, en el mundo, es alrededor del 300 %. Tomando los datos del anuario de la Sociedad de las Naciones, vemos que la Argentina, con respecto a diciembre de 1939, tiene una inflación en los precios de alrededor del 90 % y que en cambio países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia y Australia tienen alrededor del 40 por ciento.

**Sr. Cooke.** — Si me permite el señor diputado...

Sin perjuicio de que después en mi exposición amplíe algunas aclaraciones que tengo que hacer, hago notar al señor diputado que respecto de las estadísticas de la Sociedad de las Naciones, yo participo del criterio del señor diputado en su interesante obra *La autarquía argentina*, sobre la inutilidad de muchos de esos índices estadísticos, porque como los países tienen precios máximos, se han hecho estadísticas sobre la base de los precios máximos oficiales, pero que no son precios reales; además son países que tienen grandes bolsas negras.

**Sr. Peña Guzmán.** — He tomado las estadísticas más serias. Si hay estadísticas en las que no se puede confiar hoy, son las de nuestro país. No se han publicado las cifras del censo industrial de los últimos años, pues las que conocemos son las del año 1941. En cuanto a las demás estadísticas, que son malas y escasas en estos últimos tiempos, falta hacer una correlación entre los promedios del aumento de los precios de todos los artículos del comercio mayorista, con respecto al costo de la vida, pues como lo afirma el informe del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, los datos de la Argentina no conciden con la exactitud que se comprueba, por ejemplo, en otros países del mundo. Por esa razón he tomado los datos que ofrecen mayor seriedad, que son los de la Sociedad de las Naciones, habiendo comprobado cómo algunos países revelan un índice de inflación muy inferior al nuestro.

Cabría preguntarse si existe algún antecedente nacional o internacional sobre este conjunto de decretos de reformas bancarias. Existe, señor presidente, y es el plan de reactivación de Pinedo de 1940, antecedente de tal similitud que llevara a un semanario argentino, *Economic Survey*, a decir con toda precisión, que esta nueva estructuración bancaria, no es nada más que la

reedición perfeccionada y agudizada del programa del conservadorismo castillista de 1940.

Los dos planes comienzan con las mismas razones fundamentales. En 1940, el plan de reactivación económica decía en sus considerandos: «Habría que evitar la experiencia de la crisis anterior en que nuestro banco oficial fué en forma exclusiva al redescuento, para ayudar a los bancos en malas condiciones.» Esta es la misma razón fundamental que se aduce en los considerandos de la nacionalización del Banco Central. Con respecto a las transferencias bancarias, introducidas como una novedad en el plan Pinedo de 1940, dice lo siguiente: «La idea es de que el banco propoudría a éstos tomar a su cargo parte de su responsabilidad sobre los depósitos sin modificar, por supuesto, en lo más mínimo, la relación de cada banco con sus propios depositantes.» La nueva estructuración bancaria dice: «El punto básico del nuevo sistema consiste en que el Banco Central tome a su cargo la totalidad de sus depósitos, sin modificar el trato de cada banco con sus propios depositantes.»

No es sólo una similitud de ideas, sino hasta una simple identidad en el lenguaje.

El plan de reactivación de Pinedo dice más adelante: «El Banco Central se obligará a reembolsar a los bancos el interés que éstos paguen a sus depositantes.»

La nueva estructuración dice: «En este caso importa, desde luego, que el Banco Central satisfaga el interés que paga a los depositantes.»

Por último, con respecto a la comisión, el anterior plan Pinedo decía: «Sería necesario pagarles además una comisión a calcularse en forma que la operación no les produzca quebrantos ni se conviertan tampoco en fuente de recursos extraordinarios.» ¿Y qué es lo que dice la nueva organización en este punto? «Que se le abone una comisión suficiente establecida en forma que sin producirle quebrantos no sea tampoco fuente de recursos extraordinarios.» Es decir, existe una absoluta identidad en el propósito y en el texto mismo de esta nueva organización bancaria con lo que fué una intención en el año 1940 de tener también una dictadura económica con el conservadorismo castillista de aquella época, que fué aprobada en el Senado pero no fué tratada en la Cámara de Diputados. De modo que la novedad revolucionaria tiene en el país un antecedente y que es el programa de reactivación económica del doctor Pinedo.

El partido radical en aquella época fustigó en forma acerba esta intención, y el Comité Nacional nombró una comisión especial que se abocó al estudio del plan e inmediatamente dió la voz de alarma sobre lo que significaba el uso y discrecionalismo del crédito mediante la trans-

ferencia de depósitos y las facultades extraordinarias que exigía el entonces ministro de Hacienda para gobernar a su antojo la economía y las finanzas del país. Voy a señalar brevemente algunos considerandos del dictamen de esa comisión. Hablaba de la «grosera tutoría del Estado» que estaba consumando una «estructura dictatorial» que a veces significa la suma del poder público. «Ha gravitado más —dice el informe—, acaso sin análisis, en el espíritu de los iniciadores del proyecto, tal vez sin saberlo, el contagio de ideologías exóticas que los principios básicos de nuestro régimen constitucional y las garantías al trabajo, al crédito y al ahorro.» «¿Qué significa —se preguntaba— ese comando discrecional superior e inapelable que en definitiva va a determinar las industrias, personas y entidades que puedan usar libremente del crédito?» Y hasta como una cuestión muy sugestiva se refería también a los proyectos de una llamada argentinización de los ferrocarriles que proponía el plan Pinedo, como accesoria a las reformas bancarias. Hoy también, por coincidencia, se está tratando junto con la nueva organización bancaria, la sociedad mixta con los ferrocarriles ingleses.

¿Y quiénes formaban esta comisión? La formaban tres radicales, que eran los doctores Julio Borda, Félix Solana y el doctor Hortensio Quijano, actual vicepresidente de la Nación. Yo quisiera saber, señor presidente y sería muy interesante, si el señor vicepresidente de la República mantiene todavía los términos enérgicos y rigurosos con que se expresó respecto a esta reforma bancaria. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Por estas razones la Unión Cívica Radical se va a oponer a la sanción de este proyecto de ley. Cualquier modificación de detalle no tendría mayor eficacia, dada la intención de que todo este sistema bancario obedezca a un único manejo discrecional de los fondos del país, lo que significa no solamente un atentado contra principios básicos de la Constitución, sino pasar por alto las prerrogativas del Honorable Congreso. Por estos fundamentos los diputados de la Unión Cívica Radical votarán en contra.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Pontieri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Ravignani.** — ¿Me corresponde a mí?

**Sr. Presidente (Pontieri).** — Sí, señor diputado.

**Sr. Ravignani.** — No creía que fuese ése el orden; pero no tengo inconveniente en hacer uso de la palabra.

Ya decía al iniciarse este período parlamentario en dos proyectos de resolución que presenté, que una de las cuestiones de mayor magnitud planteadas por el gobierno defacto era

el ordenamiento bancario y activación de la economía.

Debo decir que en realidad, estos decretos ya se vienen aplicando desde comienzos de año y el gobierno constitucional los ha sometido a ratificación produciéndose este importante y fundamental debate, en el que lamento que no contemos con la colaboración del señor ministro de Hacienda, porque, como lo han hecho notar los señores diputados, tanto en el informe de la mayoría de la comisión como en el de la minoría, se trata de una nueva etapa de la economía nacional, de la política financiera y, hasta —¡por qué no decirlo!— de asegurarse el Estado fiscal recursos para fines administrativos.

Esta es una modificación vertical que influirá sobre la vida nacional de una manera amplia. Se dijo por el señor miembro informante de la mayoría que esta serie de decretos traería un beneficio exclusivo para la colectividad. Yo afirmo que por el conjunto de decretos que tenemos a ratificación, resultará muy difícil a quien los analice detenidamente, establecer que están destinados exclusivamente a la colectividad como reactivación económica.

Ya demostraremos al ocuparnos del plan quinquenal cómo realmente se establece una especie de simbiosis entre el trabajo de los habitantes de la República y la manera de obtener recursos fiscales, política peligrosa porque en un momento determinado, con esta totalización económica, no sabemos dónde termina el interés privado y dónde comienzan las necesidades del Ministerio de Hacienda para tapar en más de una oportunidad los rumbos que puedan hacerse en la nave del Estado en materia de finanzas.

En la motivación de los decretos está perfectamente definida la política que inspira toda esta planificación. Perfectamente definida, porque so pretexto de asegurar una mayor actividad en el país desaparece la iniciativa privada tan indispensable.

Se quiere que la iniciativa privada intensifique su explotación para crear mayores bienes y promover trabajo nacional, pero en seguida se dice: En un país como el nuestro si esa intensificación se circunscribiera a la iniciativa privada, falta de seguro resultado, demoraría muy largo tiempo. Entonces, lo que se quiere en uno de los fundamentos del ordenamiento que se hizo en el mes de marzo de 1946 es una racional regulación económica de vastos alcances bajo la dirección superior del Banco Central, que asumiría entonces, como instrumento oficial y técnico del Estado, el verdadero contralor de la política económica financiera de la Nación, asegurando una encomiable unificación de propósitos y de criterio. Con esto, se ve claramente dónde va a parar esta política de protección, de orientación, de tutelaje asfixiante, como estoy seguro lo va a

demostrar la práctica y como se preanuncia en muchas actividades del país. Porque ahora estamos un poco envanecidos con la crisis de crecimiento, de las vacas gordas, pero yo afirmo que faltan bases sólidas para decir que esta situación tendrá un desarrollo normal de previsión, tal como se quiere plantear con optimismo por parte de la orientación financiera y económica del gobierno.

Distinguidos colegas de mi sector: tanto el miembro informante de la minoría, diputado Santander, como el diputado Peña Guzmán, han hecho observaciones fundamentales sobre las que no he de volver; pero me voy a permitir tocar algunos de los problemas que reiteradamente están considerados en la organización de los bancos que tenemos aquí, en nuestra mesa, para ratificar; y para probar también cómo hay a veces un afán de precipitación, de falta de estudio en la aplicación de principios, como los que se quieren resolver con estos decretos leyes.

En otra oportunidad me referí a lo que creo uno de los asuntos esenciales de esta activación económica: el factor humano. En este país, casi despoblado, no sabemos en estos instantes cuál es con precisión el monto y la distribución de la población, a pesar de tantos decretos rimbombantes sobre censos nacionales, en los que no se ha hecho otra cosa que gastar millones de pesos en su inútil preparación. La última medida del Poder Ejecutivo tiende a borrar todo lo hecho y, lo que puede ser algo más insostenible, que tendrá que ser debatido en la Cámara oportunamente, falta el elemento esencial estadístico, como ha dicho el señor diputado Peña Guzmán, falta el elemento esencial de la distribución de nuestra población.

Decía ya en aquella oportunidad —y voy a ocuparme ahora con un poco más de detenimiento— que la transformación fundamental de los Estados Unidos de América se debió a las fuertes corrientes de población venidas de los centros más activos de la Europa, con pioneros de calidad en cuanto al empuje, y que de la estrecha faja de las viejas colonias inglesas fueron conquistando el centro del país, fueron al *west* y luego al *far west* para constituir esta formidable potencia económica con frente a ambos océanos.

En cambio, nosotros nos encontramos, en el país, con una situación realmente angustiada en cuanto a los movimientos de las masas humanas. Podríamos llenar muchas páginas con leyes y decretos, pero afirmo que será algo teórico, en el papel, trasplantando pura y simplemente, sin fundamento, iniciativas que han sufrido el fracaso en otros países.

Al efecto me voy a permitir glosar disposiciones que constan como objetos fundamentales de esta reordenación bancaria. Así, por ejemplo, nos encontramos que, según resulta del decreto

que figura en la página 1611 del orden del día, una de las operaciones esenciales del Banco de la Nación consiste en la organización y financiamiento de inmigraciones calificadas para su radicación en el país. En el mismo proyecto, el artículo 4º dice que el banco tiene por objeto fomentar la producción agraria, y el desarrollo y organización del comercio, etcétera. Claro que fomentar la producción agraria tiene que hacerse a base de brazos; la tierra es fecunda, lo sabemos, pero dentro de breves instantes me voy a referir al problema del campo argentino, que es pavoroso en cuanto a materia humana.

Más adelante, en el decreto relativo al Banco de Crédito Industrial, se dice en el artículo 21, inciso c), que una de las operaciones fundamentales del banco es la organización y financiamiento de inmigraciones calificadas para su radicación en el país. Repetición del mismo concepto. Un poco más adelante, al ocuparse del Banco Hipotecario Nacional, el decreto que figura en la página 1623 dice en el artículo 19, inciso d): «participar dentro de sus fines específicos en la organización y financiamiento de inmigraciones calificadas para su radicación en el país».

Bien, señor presidente; casualmente en estos días, la opinión pública ha sido notificada de que el gobierno ya toma medidas concretas a efecto de resolver ese problema de la inmigración. Hasta este instante no existe ninguna publicación, ninguna divulgación ante la opinión pública, ninguna propaganda de orden internacional, como se habitúa hacer en esta materia, que nos diga cuál es la política inmigratoria del Poder Ejecutivo, y cuál es su concepto en la aplicación de estos principios enunciados reiteradamente para tres bancos. En los diarios de hoy, por ejemplo, se dice que mañana partirá para Roma una embajada extraordinaria que tratará el problema de la inmigración; supongo que ésta será una manera de llevar a la práctica los principios legales que están enunciados como objetos importantes de estas entidades bancarias. No entro a calificar los componentes de la embajada; sea cual sea la actividad en la vida, creo que en todos los órdenes hay personas ilustradas que pueden ocuparse de estos problemas. Encabeza esta embajada, según he sabido, un distinguido sacerdote salesiano que deberá radicarse en Roma, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, un doctor en filosofía y letras y algunos empleados que no sabemos quiénes son.

No sabemos qué pensamiento de gobierno tienen los directorios y componentes de estos bancos que acabo de enunciar.

Probablemente, los señores diputados y el país ignoran el grave problema de la despoblación

de grandes zonas del país, para poder deducir cuál es la política inmigratoria, cuáles son las nacionalidades de mejor adaptación, las masas humanas que hay que traer, cuáles son las aptitudes que se requieren. Todo esto lo ignoramos y se carece de estadísticas actuales. Sin embargo, con los aportes de algunos estudiosos amigos, he podido formular un gráfico según el cual hay regiones del país con un éxodo del 15 % de su población. Tal es el caso de cierta zona de San Juan, La Rioja, parte de Catamarca, Noroeste de Tucumán y gran parte de San Luis. Lo más asombroso es que hay zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Corrientes que están viendo despoblarse sus campos, y en proporción un poco menor también se revela esa emigración en Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy y de los territorios. Este fenómeno de la migración de los campos a las ciudades se opera en virtud de la transformación efectuada en estos últimos años en el orden industrial.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara doctor Ricardo C. Guardo.

Vemos que en forma teórica, empírica, el gobierno va a entrar en cumplimiento de estos decretos, de esta política inmigratoria, en base al sistema bancario, a una acción de importancia, enviando nada menos que una embajada extraordinaria a Italia, que supongo irradiará su influencia al resto de Europa. Ya han hecho notar órganos de opinión, cómo esto se halla desprovisto de estudio. Según uno de los diarios de la Capital, parece que el plan consistiría en traer cuatro millones de inmigrantes a razón de treinta mil por mes.

Ya se sabe los errores del pasado, en que se trajo una inmensa ola inmigratoria, creándose el proletariado en la ciudad de Buenos Aires, sin saber qué hacer, convirtiéndose en parásito de nuestra población. Es claro que no me refiero a las admirables colonias de otra época de la política inmigratoria, que hicieron surgir ricos y florecientes pueblos en la campaña argentina, donde hombres de gran predicamento desarrollaron una acción persistente de gran beneficio para el país y de orgullo para sus descendientes.

**Sr. Presidente** (Guardo). — Señor diputado: de acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara, corresponde pasar a cuarto intermedio hasta las 16 horas. Continuará luego su exposición el señor diputado, quien dispone aún de quince minutos.

Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Es la hora 12 y 30.